

**Título del Trabajo:** *Los Avatares Económicos y la Normativa Jurídica de Emergencia.*  
*Un caso particular: Plan Bonex (1990)*

**Simposio N°5:** Crisis regional y crisis nacionales en el Siglo XX. América Latina entre el desequilibrio secular y la fractura socio - política y económica de fines de milenio.

**Nombre y Apellido del Autor:** Agustín Parise (DNI 25.615.127)

**Universidad:** Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

**E-MAIL:** agusparise@hotmail.com

**Nota:** El autor del presente es abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo ocupa el cargo de Ayudante de Primera en la materia *Historia del Derecho Argentino* en la misma casa de estudios. Actualmente está trabajando sobre su Tesis Doctoral en la U.B.A.. Es dable señalar que está cursando los primeros años de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Los Avatares Económicos y la Normativa Jurídica de Emergencia. Un caso particular:  
*Plan Bonex* (1990)

*Un momento socio - histórico nunca es  
homogéneo; por el contrario, es rico en  
contradicciones<sup>1</sup>*

Antonio GRAMSCI (1891-1937)

Sumario: I.- Palabras previas; II.- Normativa jurídica de emergencia; III.- Los decretos de necesidad y urgencia; IV.- El camino del *Plan Austral*; V.- Hacia el *Plan Bonex*; VI.- La labor jurisdiccional; VII.- El denominado *Corralito Financiero*; VIII.- Breve parangón entre ambos escenarios; IX.- Recapitulación y acotaciones; X.- Bibliografía Compulsada; XI.- Brief o Resumen.

I.- Palabras Previas

Se torna oportuno, ante los avatares económicos que aquejan actualmente a la Argentina, señalar antecedentes que configuraron situaciones análogas. Esto facilitará la comprensión de la situación actual.

Es por ello que al ser invitados a participar de las presentes *Jornadas* no dudamos en realizar el aporte que se generará por medio de esta breve ponencia.

Entendemos que las cuestiones económicas deben ser abordadas por especialistas en la materia, conociendo nuestras limitaciones y sabiendo que nuestra área de estudio son las ciencias jurídicas, consideramos más que oportuno realizar una aproximación a las crisis regionales por medio de una visión jurídica.

Presenta interés demostrar que las situaciones de crisis y emergencia que se desprenden de situaciones económicas críticas, son acompañas por cuerpos y piezas normativas que se generan con el fin de poder menguar el efecto negativo de las crisis.

Proponemos dejar reflejado, dentro de nuestras posibilidades, el avance que realiza la legislación ante las crisis económicas. Asimismo dejaremos plasmado el hecho de que ésta conjunción de crisis económica y cuerpo normativo de emergencia puede desencadenar recursos ante los magistrados nacionales. Esto último persiguiendo la intención de solucionar o dirimir las contingencias jurídicas que pudieran prosperar.

---

<sup>1</sup> Gramsci, Antonio; *Selections from cultural writings*, Londres, Lawrence & Wishart, 1985, pág. 93

Facilita la comprensión de nuestra tesitura acompañar un ilustrador ejemplo. Es así que nos referiremos a la emergencia económica que se dio en la Argentina durante la década de 1980 y las diversas normativas que se gestaron para apalearla.

Nos referiremos más precisamente al *Plan Bonex* y al *leading case*<sup>2</sup> que fue motivado por reclamos ante los perjuicios del referido *Plan*.

Corolario trataremos de realizar un parangón entre el mentado período y la actual crisis que aqueja al país.

Es en este punto donde presenta interés, hacer nuestras algunas palabras pregonadas por Juan José CRESTO, quien tan oportunamente sostuvo que *cada generación que soporta una crisis económica, financiera o política cree que la suya es la de mayor gravedad de la historia nacional. En el decurso de la vida de las personas longevas se oyen, a veces, comparaciones que dan idea que también hubo otras de gran magnitud. Los historiadores que estudiamos el pasado, ese mundo desaparecido por acallado o muerto, podemos juzgar con mejor objetividad, períodos que exceden largamente la vida humanan, con su capacidad testimonial y vivencial.*<sup>3</sup>

Teniendo esto último presente no podemos dejar de proponernos una visión histórico-jurídica, la cual colaborará sin dudas a la cabal comprensión que los economistas deben darle al período sujeto a estudio.

Sin la intención de prolongar demasiado estas palabras previas es oportuno pasar a desarrollar los temas que comprenden nuestro ensayo.

## II.- Normativa jurídica de emergencia

Como lo hemos adelantado en el primer apartado, existe una normativa de emergencia que se propone apalea las crisis económicas que se generan.

Es sabido que el derecho está siempre un paso detrás de los sucesos, ya que no se puede prever la gestación de situaciones de excepción. Lo contrario sería tarea de augures o profetas.

Los estadistas solo pueden limitar su tarea a la creación de cuerpos de leyes que dadas sus características serán aplicables a una determinada sociedad y que su vigencia

---

<sup>2</sup> Sentencia que sirve de precedente a una serie sucesiva de decisiones basadas en la misma (conf. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Diccionario Jurídico -Tomo I-*, Bs.As., Heliasta, 1996, pág.362)

<sup>3</sup> Cresto, Juan José; *Las crisis económico – financieras argentinas. La crisis de 1873/1876*, soporte electrónico para [www.eldial.com](http://www.eldial.com) –editorial albremática-, Bs.As., 2003.

será amplia debido a su naturaleza. Ésta última encuentra inserta el sentir del pueblo y se amolda a los cambios que no afectan lo intrínseco del sentir.

Ejemplos de esto se pueden encontrar en cuerpos tales como nuestro Código Civil, pieza magistral elaborada por el docto cordobés Dalmacio VÉLEZ SARSFIELD. Fue sancionada en 1869 y se encuentra vigente desde 1871 a la fecha salvando los cambios que el paso del tiempo le impone.

En la misma línea se puede mencionar la Constitución Nacional de 1853/60. Nuestra Carta Fundamental subsiste al día de hoy aún ante los cambios y reformas que ha tenido.

Podemos resumir que estos cuerpos tienen la particularidad de estar planteados para resistir el desarrollo generacional de una nación. Para los supuestos que no encuadran en estas características existen otras leyes que se promulgan cuando existen situaciones especiales de desequilibrio o contradicciones.

Entre estos podemos señalar las leyes especiales (v. gr. emergencia económica, desastre natural, estado de conmoción). Las referidas leyes se dictan por medio del proceso ordinario que existe. Deben ser aprobadas por el poder legislativo y los tiempos para su promulgación son respetados.

Por otra parte es dable adelantar que cuando el tiempo apremia y el Poder Legislativo no llega a una posición conciliatoria ante determinado tema se pueden encontrar decretos de necesidad y urgencia.

Los denominados decretos de necesidad y urgencia son los que en mayor medida se dan ante situaciones de emergencia, v. gr. crisis económicas.

### III.- Los decretos de necesidad y urgencia

Como cuestión liminar debemos entender que la figura que ilustra el título de este apartado, forma parte de las llamadas facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo Nacional. Lo podemos encontrar más precisamente en la letra del art. 99 inc. 3 de nuestra Constitución Nacional.

Bajo la denominación *facultades reglamentarias*, la doctrina agrupó tradicionalmente los atributos reglamentarios propios del Ejecutivo. En esa categoría se inscriben, con carácter de ley material, los reglamentos ejecutivos, los reglamentos autónomos, la legislación delegada y los decretos de necesidad y urgencia. Todo sin

perjuicio de las distancias que separan a estas potestades y, particularmente, del significado político - constitucional adquirido por los dos últimos institutos.<sup>4</sup>

Ahondar sobre el sentido y alcance de los diversos atributos reglamentarios excede el presente trabajo de divulgación. Lo que no puede quedar al margen es señalar someramente el hecho de que ante situaciones de excepción, el Poder Ejecutivo está habilitado para dictar reglamentos que puedan ayudar a sobrellevar una determinada situación de crisis.

El Decreto de Necesidad y Urgencia fue mutando a lo largo de los últimos años. Se le dio diversas denominaciones v. gr. reglamento, decreto - ley, &. Ya con la reforma de 1994 la denominación es la que ilustra este apartado.

Las alteraciones no se dieron tanto con relación a su forma material, sino con relación a la legitimación y uso que se le atribuye.

A lo largo de la historia nacional no podemos sostener que se hayan utilizado demasiado los decretos de necesidad y urgencia. Sólo se ve incrementada su utilización a partir de la década de 1980

El referido incremento es notorio y ha sufrido críticas por parte de la doctrina nacional. En los últimos veinte años de nuestra historia se dictaron mayor cantidad de decretos de necesidad y urgencia que en la suma de todos los restantes.

Cabe recordar que el 14 de junio de 1985, se dictó el decreto 1096/85<sup>5</sup>, mediante el cual se instauró el *Plan Austral*, que creó no sólo una nueva moneda de curso forzoso, sino que además derogó leyes, como la ley 18.188<sup>6</sup>, del *peso* y la 22.707<sup>7</sup>, del *peso argentino*. Con posterioridad, otro decreto ordenó su remisión al Congreso, y éste lo ratificó por medio del artículo 55 de la ley de presupuesto 23.410<sup>8</sup>

Podemos comprobar que allí, con el *Plan Austral*, comenzó una serie que, luego del cambio de gobierno de 1989, se ha convertido en una verdadera avalancha que ha preocupado a la generalidad de la doctrina constitucionalista.<sup>9</sup>

Aún cuando signifique avanzar sobre asuntos que desarrollaremos *infra*, cabe señalar que esta situación continuó con el dictado del decreto 36/90<sup>10</sup>, mediante el cual

---

<sup>4</sup> Midón, Mario, *Decretos de Necesidad y Urgencia en la Constitución Nacional y los Ordenamientos Provinciales*, Bs. As., La Ley, 2001, pág. 20.

<sup>5</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 17 de junio de 1985

<sup>6</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 22 de abril de 1969

<sup>7</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 11 de enero de 1983

<sup>8</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 09 de diciembre de 1986

<sup>9</sup> Pérez Hualde, Alejandro; *Decretos de Necesidad y Urgencia Límites y control*, Bs. As., depalma, 1995, pág.11

<sup>10</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 05 de enero de 1990.

se impulsó el *Plan Bonex* y que luego motivó el *leading case Peralta* de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta catarata de decretos generó que la reforma de 1994 trate de limitar su dictado. Por esto la nueva letra de la Constitución Nacional rechaza la posibilidad del dictado de los decretos de necesidad y urgencia fundados en la conveniencia. También a aquellos fundados en cualquier estado de emergencia o necesidad. Asimismo rechaza que la facultad extraordinaria sea ejercida por otro sujeto que no sea aquel a quien la Constitución la ha otorgado la atribución.

El estado de necesidad que la norma constitucional contempla es el que hemos caracterizado en su perfil fáctico (urgente necesidad) e institucional (imposibilidad de recurrir a trámites ordinarios de sanción de la leyes). Ese estado de necesidad, así concebido, adoptado por la nueva constitución nacional, es el aceptado en el campo del derecho civil, penal y también administrativo, que se pone en marcha frente al caso crítico que ha paralizado a las instituciones.<sup>11</sup>

#### IV.- El camino del *Plan Austral*

Hemos manifestado *ad initio*, que el ejemplo que ilustraría nuestra tesitura sobre la existencia de una convivencia de crisis económicas y normativa de emergencia, estaría dado por los sucesos que aquejaron a la Argentina durante la década del 1980

Ya pudimos adelantar que en 1985 se instauró el *Plan Austral* mediante el decreto 1096/85.

Con el referido plan entró en vigor un conjunto de importantes medidas financieras cuyo propósito básico fue el de intentar poner coto al desborde inflacionario. En los primeros seis meses de 1985, con apenas quince días de vigencia del nuevo ordenamiento, el aumento en el nivel de precios al consumidor llegó al 303%, mientras que el de los precios mayoristas alcanzó al 347%. Significativamente la economía argentina bajo un régimen auténticamente constitucional y democrático vivió el fenómeno de una inflación que superaba todos los índices conocidos en el país.

Pese a estas evidencias, la improvisación suplantó nuevamente a la reflexión. La experiencia vivida en tres años de *Plan Austral* no fue suficiente para decidir una alternativa distinta. Se volvió a eludir la consideración estructural y se insistió en el

---

<sup>11</sup> Pérez Hualde, Alejandro; *Decretos de Necesidad y Urgencia Límites y control*, Bs. As., depalma, 1995, pág.86

enfoque monetarista, pero ahora bajo la presión de tener que reunir rápidamente una cuota adicional de fondos para nivelar el monstruosos déficit originado en los gastos del Estado, en el accionar del Banco Central y en el funcionamiento de las empresas estatales.

Para ello se actuó, esencialmente, sobre los salarios y el tipo de cambio de las exportaciones de productos primarios. Se aprobaron sensibles alzas en los precios, a modo de *colchón* para varios meses, y se fijaron nuevas tarifas en todos los servicios prestados por el Estado. Se dispuso sostener el dólar marginal al costo de permitir y estimular la vigencia de tasas de interés imposibles de absorber en una economía civilizada. Y el Banco Central pasó a ser la única autoridad en medio de una profunda crisis económica y social.<sup>12</sup> Este fue el panorama, que a grandes rasgos primó en la segunda mitad de la década de 1980

Esta breve reseña es necesaria para comprender cabalmente el hecho de que se vivía una especial crisis financiera que sin lugar a dudas requeriría de normas jurídicas que se preparen para sobrellevarla de la mejor manera posible.

#### V.- Hacia el *Plan Bonex*

En el apartado anterior hemos logrado esbozar a grandes rasgos la crisis inflacionaria que aquejó a la Argentina durante la década de 1980 y la intención de solucionar el problema mediante la implantación del *Plan Austral*. Fue en el año 1990, bajo el gobierno de Carlos Saúl MENEM, que se intentó solucionar el problema con la creación del denominado *Plan Bonex*.

Consideramos de sumo interés acompañar algunos extractos de una nota periodística publicada en el matutino *Clarín*, la cual seguramente logrará reflejar el estado de cosas en ese período de tiempo.

Sin más acompañaremos las partes que presentan especial interés:

*El primer día de 1990 se lanzó el nuevo plan para fortalecer el austral como medio de pago. Concretamente con una serie de medidas. Lo más sustancial de lo anunciado es una reforma financiera que suspende los plazos fijos en australes –así como también las renovaciones- para volver a reimplantarlos en el futuro a un lapso mínimo de 90 días. Asimismo, se limitará la devolución de las extracciones a un millón*

*de australes. El resto de los depósitos serán canjeados por Bonos Externos, emisión 1989.*

*Se anticipan 30.000 australes a los empleados públicos y niegan futuros aumentos de combustibles y tarifas. El programa en sí es una limitación a fondo de los australes en circulación – luego del cimbronazo de las medidas se promete dejar de emitir- una disminución drástica del déficit fiscal y el mantenimiento de la libertad en la variable de la economía*

*El meollo del plan pasa por conseguir un rápido apoyo externo, toda vez que, tal cual lo comunicó el Ministro de Economía, las reservas en dólares apenas alcanzan a 830 millones de dólares, mucho menos de lo supuesto por la mayoría de los analistas. Y en este caso, las reservas de oro –menores también que las supuestas- poco cuentan en la coyuntura.<sup>13</sup>*

A este breve, pero ilustrador pasaje debemos agregar cuestiones relacionadas con la normativa dictada para sustentar estas medidas.

En primer término cabe señalar que con anterioridad a estas medidas se habían promulgado la ley 23.696<sup>14</sup> de reforma del estado y la ley 23.697<sup>15</sup> de emergencia económica.

Ambas habían preparado el terreno que advertía sobre la posibilidad de que se tengan que tomar medidas drásticas para salvar al Estado de la situación de crisis que atravesaba.

Entre los temas primordiales se encontraba la consolidación de la deuda pública interna. Por otra parte, era finalidad que el Congreso había expresado como lo demuestra el art.38 de la ley 23.679<sup>16</sup>

Teniendo esto presente podemos señalar que el dictado del decreto 36/90 fue un eslabón más de la cadena para intentar alcanzar esa solución.

Por su parte el Banco Central de la República Argentina mediante la comunicación “A” 1603, del día 03 de enero de 1990, se dirigió a las entidades financieras comunicándoles que se limitaba la devolución de los depósitos en las

---

<sup>12</sup> Di Baja, Augusto Cesar; *Plan Austral. Antecedentes, exposición y crítica*, Bs.As. Acta Económica, 1989, pág.65

<sup>13</sup> *Salió el cero, Pierden todos* nota publicada en el matutino “Clarín” del 07 de enero de 1990 pág. 1 de la Sección Economía

<sup>14</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 23 de agosto de 1989.

<sup>15</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 25 de septiembre de 1989

<sup>16</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 05 de julio de 1989



cuentas a plazo fijo a la suma de un millón de australes, abonándose el excedente en Bonos Externos 1989

Corolario de este apartado podemos señalar, aun cundo sea reiterativo, que ante la existencia de un proceso de crisis inflacionaria, el poder legislativo en primer término, y luego el poder ejecutivo propiciaron medidas para intentar solucionar la crisis. Esto fue mediante el dictado de leyes y posteriormente de decretos de necesidad y urgencia.

## VI. La labor jurisdiccional

Las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo tuvieron como efecto una gran cantidad de presentaciones de particulares ante los estrados judiciales. Los titulares de depósitos a plazos fijos argumentaban, mediante acciones de amparo, que el decreto 36/90 y sus normas consecuentes eran inconstitucionales.

Cabe reiterar que el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, previo a la reforma constituyente de 1994, no se encontraba determinado (al menos en su alcance) en nuestra carta magna. Ese nombre era el dado por la doctrina nacional, tal como lo hemos manifestado anteriormente.

Por esto el Máximo Tribunal de la Nación estuvo frente a una situación de sentenciar que seguramente alteraría la jurisprudencia del órgano.

Fue en los autos *Peralta*<sup>17</sup> cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. Este proceso judicial actuó como *leading case* en las restantes situaciones que se asimilaran.

El supremo Tribunal de la Nación, señaló que cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede -sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales- postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos.

Asimismo sostuvo que cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de

---

<sup>17</sup> *Peralta, Luis A. y otro c/ Estado Nacional*, Expediente 89455/90, C.S.J.N. 27/12/1990, en “Revista Jurídica La Ley”, Tomo 1991-C, Bs. As., pág. 158 y ss.

tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional.

Por el contrario manifestó que se estaría ante una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis, destacando la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el sistema constitucional argentino no hay derechos absolutos y todos están subordinados a las leyes que reglamenten su ejercicio.

Consideramos oportuno cerrar este apartado manifestando, tal como lo hiciera la Corte en el fallo sujeto a comentario que *la confrontación de intereses que dilatan –y normalmente con razón dentro del sistema- la toma de decisiones, las presiones sectoriales que gravitan sobre ellas, lo que es también normal, en tanto en su seno están representados los estados provinciales y el pueblo –que no es una entidad homogénea sino que los individuos y grupos en el integrados están animados por intereses muchas veces divergentes –coadyuvan a que el Presidente, cuyas funciones le imponen el concreto aseguramiento de la paz y el orden social, seriamente amenazados en el caso, deba adoptar la decisión de elegir las medidas que indispensablemente aquella realidad reclama con urgencia impostergable.*<sup>18</sup>

Seguramente no huelgue señalar, que lejos quedó para la Corte decidir si la medida fue la correcta. Lo que nuestro Máximo Tribunal se limitó a señalar es la necesidad de que se dicten normas que ayuden a combatir el estado de crisis que pudiera existir. Esto queda reflejado en la letra del fallo al sostener nuestro tribunal que *como se verá [la eficacia de la medida adoptada] es extraña a la valoración judicial*<sup>19</sup>

Ese dictado de normas puede ser realizado de la manera ordinaria, o de manera extraordinaria por medio del dictado de decretos de necesidad y urgencia.

## VII.- El denominado Corralito Financiero

Excede al desarrollo del presente trabajo ahondar en el análisis de los sucesos que ocurrieron en diciembre de 2001. Sin embargo, entendemos que no vincular el análisis del *Plan Bonex* con el denominado *Corralito Financiero*, sería dejar pasar una interesante oportunidad de revisar los sucesos.

Obviamente no nos extenderemos sobre el análisis de esta cuestión. Solamente señalaremos sus orígenes y evolución.

---

<sup>18</sup> Idem, considerando 29

<sup>19</sup> Idem, considerando 26

El origen del *corralito* fue principalmente que los depósitos venían cayendo, y se buscó prevenir una *corrida* cambiaria y bancaria, dado que el aluvión de ahorristas buscando sus depósitos iba a atraer mas ahorristas en un círculo vicioso.

Al inmovilizar los medios de pago el resultado inmediato fue que se resintió ferozmente la cadena de pagos, empezando por el cobro del propio Estado.

La inmovilización se realizó por medio del decreto 1570/01<sup>20</sup> que en su art. 2 *prohibió los retiros en efectivo que superen los pesos \$250 o dólares estadounidenses doscientos cincuenta, por semana, por parte del titular o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera.*<sup>21</sup>

Al mentado decreto se le sumó todo un plexo de normas que fueron alterando esa situación inicial y que han logrado acompañar a la emergencia económica, ya sea haciendo más permisivas las extracciones o alterando los mecanismos.

A modo informativo cabe realizar un breve catálogo<sup>22</sup> enumerando las normas que tratan el tema: Leyes 25.561<sup>23</sup> y 25.587<sup>24</sup>; Decretos 214/02<sup>25</sup>, 320/02<sup>26</sup>, 1316/02<sup>27</sup> y 739/03<sup>28</sup>; y Comunicación “A”3467 del Banco Central de la República Argentina de fecha 08 de febrero de 2002.

En esta oportunidad los titulares de depósitos acudieron ante la justicia promoviendo acciones de amparo. Han planteado la inconstitucionalidad de las normas que imposibilitan la libre disponibilidad de los depósitos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se enfrenta ante una situaciones determinante como la que enfrentó en la década de 1990. Aún no se ha pronunciado<sup>29</sup>.

Fuera cuál fuere la resolución del Máximo Tribunal, lo que es importante para el desarrollo de nuestra ponencia, es que ha quedado reflejado que ante la existencia de emergencias económicas, se deben elaborar normas que ayuden a solucionar la misma. Esta es la tesitura que venimos sosteniendo desde un comienzo, y es la misma que nuestra Corte Suprema ha pregonado al fallar en los autos *Peralta*.

---

<sup>20</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 03 de diciembre de 2001

<sup>21</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 03 de diciembre de 2001

<sup>22</sup> Este listado es enunciativo, por lo tanto no incluye todas las normas que regulan o tratan el tema. Dista de ser completo.

<sup>23</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 07 de enero de 2002

<sup>24</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 26 de abril de 2002

<sup>25</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 04 de febrero de 2002

<sup>26</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 15 de febrero de 2002

<sup>27</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 24 de julio de 2002

<sup>28</sup> Texto oficial e íntegro publicado en el Boletín Oficial con fecha 01 de abril de 2003

<sup>29</sup> La presente ponencia se ha presentado para su exposición, en las presentes *Jornadas*, con fecha 13 de junio de 2003.

### VIII.- Breve parangón entre ambos escenarios

Ignorar que existen relaciones entre ambos escenarios, *id est* el *Plan Bonex* y el *Corralito Financiero*, es un grosero yerro.

En primer término cabe señalar una diferencia que seguramente colaborará en el proceso de comprensión con relación al alcance de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Es necesario indicar que el *Plan Bonex* estaba destinado solamente a los depósitos en plazo fijo; mientras que el *Corralito* afecta no solo a estos sino que también a las cajas de ahorro y cuentas corrientes.

Ya con atención a las semejanzas cabe señalar que las acciones de amparo se promueven contra los decretos del Poder Ejecutivo que limitan la libre disponibilidad de los depósitos.

Asimismo es necesario recalcar que los decretos fueron dictados debido a la crisis económica que aquejaba, en distintos períodos de tiempo, a la República. Es decir se persigue evitar un mal peor, al limitar la disposición de los ahorros.

Habiendo mencionado la existencia de situaciones de crisis económica, solo nos limitaremos a señalar que las situaciones económicas son notoriamente distintas. El desarrollo de estas diferencias debe ser abordado por especialistas en el área económica, nosotros nos conformamos con señalar que hay situaciones de emergencia.

### IX.- Recapitulación y acotaciones

Todo trabajo de divulgación merece algunas palabras finales que le den al marco de cierre. Ante esto es que no dudamos en realizar una somera recapitulación de los temas tratados.

Hemos abordado la temática de la normativa de emergencia y la innegable existencia cuando situaciones especiales lo requieren.

Asimismo comentamos brevemente la existencia de decretos de necesidad y urgencia.

Pudimos hilar al *Plan Austral* con el posterior *Plan Bonex*. Señalando claramente que ambos se dieron como fruto de un estado de emergencia.

El segundo de los planes hubo generado reclamos ante los tribunales y estos, mediante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos *Peralta*,

resolvió que ante situaciones de crisis y emergencia el dictado de los mentados decretos es conforme con la Constitución Nacional.

Teniendo esto último presente pudimos señalar la existencia a de una situación actual, la cual está denominada como *Corralito financiero*, y que presenta seguramente ribetes similares a los que ocurrieron en la década de 1980.

Es en este punto interesante volver sobre las palabras que sirvieron de epígrafe a nuestra exposición. Esto es debido a que las crisis no son uniformes y aún cuando presenten aspectos similares o análogos, jamás podrán ser encasilladas como algo idéntico. Las contradicciones a las que hace referencia el pensador italiano, son las que sin lugar a dudas motivan la creación de normas que servirán en el caso particular.

#### X.- Bibliografía Compulsada

Para elaborar esta temática se tomó como base la siguiente bibliografía, fallos jurisprudencias y notas periodísticas cuya lectura sugerimos:

- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Diccionario Jurídico -Tomo I-*, Bs.As., Heliasta, 1996
- Cresto, Juan José; *Las crisis económico – financieras argentinas. La crisis de 1873/1876*, soporte electrónico para [www.eldial.com](http://www.eldial.com) –editorial albremática-, Bs.As., 2003.
- Di Baja, Augusto Cesar; *Plan Austral. Antecedentes, exposición y crítica*, Bs.As. Acta Económica, 1989.
- Gramsci, Antonio; *Selections from cultural writings*, Londres, Lawrence & Wishart, 1985.
- Midón, Mario, *Decretos de Necesidad y Urgencia en la Constitución Nacional y los Ordenamientos Provinciales*, Bs. As., La Ley, 2001.
- Peralta, Luis A. y otro c/ Estado Nacional, Expediente 89455/90, C.S.J.N. 27/12/1990, en “Revista Jurídica La Ley”, Tomo 1991-C, Bs. As., pág. 158 y ss.
- Pérez Hualde, Alejandro; *Decretos de Necesidad y Urgencia Límites y control*, Bs. As., depalma, 1995.
- *Salió el cero, Pierden todos* nota publicada en el matutino “Clarín” del 07 de enero de 1990 pág. 1 de la Sección Economía.

## XI.- Brief

Se torna oportuno, ante los avatares económicos que aquejan actualmente a la Argentina, señalar antecedentes que configuraron situaciones análogas. Esto facilitará la comprensión de la situación actual.

Nos proponemos en las líneas que formarán nuestra ponencia, señalar someramente las características de la aguda crisis socioeconómica que sufrió la Argentina durante la década de 1980; asimismo indicar como esto desencadenó en la gestación del *Plan Bonex*.

Consideramos, en tal sentido, enriquecedor señalar aspectos histórico jurídicos, que a la par de los económicos, ayudarán a comprender más cabalmente la situación que se vivió en aquel difícil período de tiempo.

El interés que puede despertar un enfoque jurídico sobre la cuestión no debe ser menospreciado, toda vez que las normativas jurídicas acompañaron las mutaciones que las crisis socioeconómicas generaron. Plantearemos el desafío de conocer la crisis socioeconómica mediante las normativas (v.gr. Decreto 36/90) y fallos jurisprudenciales (v.gr. caso *Peralta*) que se dieron y acompañaron el lapso de tiempo sujeto a estudio.

Corolario a la breve ponencia realizaremos un breve parangón entre la crisis económica actual, con el denominado *corralito financiero*; y los aspectos más destacados del *Plan Bonex*. Tratando de señalar, de este modo, que las crisis generan estados de emergencia los cuales pueden presentar ribetes de semejanza.

Teniendo esto presente no podemos dejar de contemplar el hecho de que la existencia del actual *corralito financiero* tiene antecedentes jurídicos *mutatis mutandis* en la adopción del *Plan Bonex* (circa 1990).